

Ascenso de la derecha y recomposición del Estado

El año 1931 constituye un parteaguas en la historia salvadoreña. En efecto, en ese año el estamento militar asume el control y la gestión del aparato estatal, con lo que se produce lo que se ha dado en llamar el "ascenso del militarismo" en El Salvador (R. Guidos Véjar, 1980). Hasta ese entonces, la gestión estatal era efectuada directamente por miembros de la oligarquía o por miembros de la clase política allegados a los grupos dominantes, que a través de un incipiente mecanismo de participación electoral garantizaban no sólo su continuidad en el poder, sino la identificación de los intereses del Estado con los intereses de los grupos oligárquicos vinculados a la producción y a la exportación cafetalera y el compromiso del mismo con la reproducción de un modelo de dominación anclado en la agroexportación.

La crisis de 1929 —y sus repercusiones en la estructura socio económica del país— se tradujo en una severa crisis política que hizo inviable la continuidad de la gestión oligárquica del aparato estatal. La incapacidad política de la oligarquía para hacer frente a la conflictividad social generada por la crisis, particularmente el levantamiento campesino de 1932, trajo consigo un vacío de poder que fue ocupado por el estamento militar. Desde 1932 hasta octubre de 1979 —con breves interludios que llevaron al poder, por la vía de los golpes de Estado, a una serie de juntas cívico militares o juntas de gobierno—, los militares gobernaron el país, en estrecha alianza con los grupos oligárquicos, pero con la suficiente autonomía

como para intentar al menos impulsar políticas económicas y sociales no del todo acordes con los intereses inmediatos de los grupos de poder.

Los grupos dominantes, por su parte, se desvincularon de la actividad específicamente política y centraron su quehacer en el ámbito económico. Sin embargo, irrumpieron con virulencia en la vida política del país cuando desde el Estado emanaron iniciativas contrarias, al menos en el corto plazo, a sus intereses. Este fue el caso, por ejemplo, del proyecto de transformación agraria impulsado por el gobierno del coronel Arturo Armando Molina, entre 1975 y 1976, que desató la ira de la derecha económica y la obligó a lanzar —a través del Frente de Agricultores para la Región Oriental (FARO) y de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)— una campaña sistemática de ataques contra el gobierno y contra aquellos sectores de la sociedad que respaldaban el proyecto de reforma del agro.

Como resultado de la ofensiva del gran capital, el gobierno retrocedió y el intento reformista fue abortado. Ahora bien, esta irrupción de los grupos dominantes en la vida política tuvo más un carácter gremial que un carácter específicamente político, sobre todo por la índole de la organización que articuló y encauzó los intereses del gran capital. Más aún, una vez que la batalla fue ganada, los militares continuaron con la gestión del aparato estatal, gozando de la relativa autonomía con la que hasta entonces habían estado operando, mientras que los grupos de poder económico volvieron a sus negocios privados. Para que la



derecha económica irrumpa de un modo estrictamente político —y organizada políticamente— habrá que esperar hasta principios de la década de los ochenta, cuando es fundado el partido ARENA. A partir de este momento, la derecha inicia un proceso de reacomodo y organización política con miras a acceder a la gestión estatal; este acceso se inicia en los procesos electorales de 1988 y 1989, que anuncian el ascenso del gran capital hacia el control directo —después de más de 50 años de haber renunciado a la gestión gubernamental— del aparato estatal. En las elecciones de 1994, la derecha no sólo consolida su proyecto político económico, sino que lo convierte en el proyecto hegemónico.

Para comprender lo que ha significado para la derecha su ascenso al poder estatal, es conveniente recuperar el proceso socio-político iniciado el 15 de octubre de 1979. En efecto, el golpe de Estado de octubre de 1979 marca el inicio de un proceso de transformación drástico en los mecanismos de gestión del aparato estatal. A partir del 15 de octubre de 1979, los militares abandonan la gestión del Estado con lo cual dejan un espacio de poder que requiere de una élite dirigente capaz de diseñar otro nuevo. En este contexto, emergen los tres proyectos socio-políticos que se van a disputar el poder a lo largo de la década de los ochenta: el

proyecto contrainsurgente (Fuerza Armada, Partido Demócrata Cristiano y gobierno de Reagan), el proyecto insurgente (FDR-FMLN), y el proyecto de la derecha (ARENA, FUSADES y Asociación Nacional de la Empresa Privada).

Los proyectos insurgente y contrainsurgente constituyeron los polos principales de la dinámica socio política del país prácticamente hasta finales de la década de los ochenta. Sin embargo, a raíz de los procesos electorales de 1988 y 1989, se produce una modificación sensible a nivel de las élites que conducen políticamente a la nación: en 1988, el Partido ARENA se queda con la mayoría de los escaños en la

asamblea legislativa; mientras que en 1989, desplaza del ejecutivo a la democracia cristiana, lo cual prácticamente hace colapsar el proyecto contrainsurgente que contaba con los demócrata cristianos como uno de sus puntos claves de apoyo. Como resultado de ello, desde finales de la década hasta la firma de los acuerdos de paz, en 1991 y 1992, los polos de la confrontación socio política están constituidos por el proyecto insurgente y por el proyecto de la derecha.

La derecha —o como algunos prefieren, la “nueva derecha”— termina por convertirse en el interlocutor político del proyecto abanderado por la izquierda. En los ochenta estableció los mecanismos organizativos y se apropió de un discurso ideológico coherente con los intereses particulares de clase —así como con las demandas de amplios sectores de la sociedad—, necesarios para llegar al poder estatal a través de la vía democrática electoral. La estrategia de la derecha dio sus primeros frutos en 1988 y en 1989. Así pudo encabezar desde el gobierno —y con el respaldo decidido de sectores empresariales importantes— el proceso negociador con el FMLN, que puso término en forma definitiva a doce años de guerra civil. Pero la derecha podía esperar más en su camino hacia la conquista del aparato estatal. En efecto, en las elecciones de 1994, el Estado queda casi totalmente en manos de la derecha, con la

ventaja de que su ascenso al poder es legitimado después de haber derrotado electoralmente al proyecto de la izquierda.

La derecha, al igual que antes de 1932, es nuevamente dueña del Estado. La "relativa autonomía" de que gozó el Estado salvadoreño durante más de medio siglo se ha esfumado y ahora el Estado salvadoreño ha vuelto a ser un Estado *identificado* con la clase dominante. Ciertamente, la derecha de finales del siglo pasado y de principios de éste no es la misma derecha que ha accedido al poder estatal hacia fines del siglo; ni tampoco es igual el modo de gestionar el poder. No sólo estamos ante una derecha que se ha "modernizado" —una nueva derecha— y no sólo existe una oposición de izquierda, cuya legalidad está fuera de discusión, sino que ambas, en cuanto sustentadoras de un programa político específico, han aceptado inscribir sus praxis en un marco normativo —los acuerdos de paz—, que van más allá de los intereses particulares que representan y que apunta a un nuevo proyecto de nación.

Empero, aun con todo lo novedoso que pueda significar para la derecha la propia modernización de sus filas, la oposición de izquierda y la existencia de los acuerdos de paz, lo sustantivo es que la derecha ha accedido nuevamente al poder estatal, tras haber dejado, durante más de 50 años, que los militares lo gestionaran. Como resultado de ello, no puede menos que esperarse una rearticulación no sólo del propio aparato estatal, sino de las fracciones del bloque en el poder en vistas a gerenciar el Estado. Esta reestructuración del Estado salvadoreño, así como los reagrupamientos, las alianzas y las rupturas en el interior del bloque dominante, suscitados por el "descenso del militarismo" del poder del Estado, constituyen un problema de primer orden para los sociólogos y los politólogos.

Para la gente común y corriente, más preocupada por la delincuencia, la escasez de agua o el alto costo de la vivienda, la identificación de la derecha con el Estado no podrá sino traducirse en un empeoramiento de sus condiciones de vida, en tanto que no habrá una instancia con el mínimo poder de mediación entre la voracidad empresarial y los intereses de los sectores populares. Los efectos de esta identificación se están haciendo sentir de modo dramático sobre la sociedad a raíz de la crisis ecológica que abate actualmente a El Salvador. Dada la articulación de los intereses de las grandes firmas constructoras con los de los administradores del aparato estatal, esa crisis ecológica no sólo no da señales de tener solución en el corto o mediano plazo, sino que amenaza con sumergir irreparablemente al país en la más absoluta decadencia ambiental.

En definitiva, el ascenso de la derecha al poder amenaza con traer más males que bienes al país. La voracidad empresarial requiere de una instancia que, interesada más por el bien general de la nación que por los intereses particulares del gran capital, sea capaz de imponerle límites. Por el momento, esa instancia es prácticamente inexistente y los empresarios saben que tienen vía libre para enriquecerse sin importar el costo social o ecológico. El Estado, en El Salvador de fines de siglo, está totalmente alejado del Estado soñado por el liberalismo clásico, es decir, el Estado como instancia garante del *bien común* y de los *intereses generales* de la nación. Si la clase política del país pudiera dotar al Estado de la autonomía suficiente para atender al bien común y a los intereses generales de la nación su contribución a la viabilidad social, económica y ecológica de El Salvador sería invaluable.

L. A. G.